

LA PAZ TOTAL VISTA DESDE LAS REGIONES: TENSIONES, ACERCAMIENTOS Y VOLUNTADES

LAI, Freie Universität Berlin, Seminario Virtual, Junio 2023

INTRODUCCIÓN.

El presente Policy Brief analiza posibles líneas de acción política y académica para un diagnóstico de la paz total desde una perspectiva regional en Colombia. El evento desarrollado por el Grupo Berlin de Investigación en Conflicto y Paz de la Universidad Libre de Berlín, abordó 4 elementos sustanciales para comprender las dinámicas, las especificidades y las oportunidades de la paz total en un ejercicio territorial. Estos elementos se distribuyeron en: (i) Actores armados: unidades, frentes o estructuras que hacen presencia activa en los territorios, las trayectorias, sus divisiones y su accionar rural/urbano; (ii) Tipos de violencias: los ejercicios de violencia por parte de organizaciones criminales ejercida contra líderes sociales, organizaciones campesinas, étnicas y comunidad LGBTI, como modalidad de extensión del mensaje criminal, (iii) avances en materia de paz total: procesos de acercamiento, tensiones, ceses al fuego, procesos de vinculaciones de la sociedad civil, planes en torno a los ceses al fuego y finalmente, (iv) Nexos políticos/económicos y grupos armados ilegales:

los niveles y procesos de incidencia de los grupos armados en la construcción de la política local, los niveles de proyección política y la capacidad de afectación en las elecciones locales.

En este sentido se asume la necesidad de explicar cuáles son los matices, las particularidades y las especificidades que suponen analizar la construcción de paz y la estabilización de los territorios colombianos, no solamente en perspectiva académica, sino desde la voz y el activismo de líderes y lideresas sociales, representantes de organizaciones, militantes e investigadores, todos confluyendo para la consolidación de una política de paz total estratégicamente nacional y tácticamente regional.

“asume la necesidad de explicar cuáles son los matices, las particularidades y las especificidades que suponen analizar la construcción de paz ”

PARTICULARIDADES DE LA RELACIÓN CONFLICTO Y PAZ EN LAS REGIONES.

REGIÓN CARIBE. Se caracteriza principalmente por un aumento de la violencia urbana, repercutiendo en el relacionamiento de la paz total en clave de las ciudades. Ciertamente existe un análisis hegemónico sobre la violencia y la guerra a nivel rural, minimizando las conexiones y las redes del conflicto armado rural con la criminalidad urbana a través de mecanismos de expansión de aparatos criminales, inserción en mercados criminales suburbanos y puentes entre formas de control territorial en barrios y rutas interconectadas. Particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC- han logrado desdoblarse mecanismos de violencia en ciudades como Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, asumiendo controles criminales, cooptaciones de bandas locales e incluso, aumentando las cifras de homicidio en ciudades con afluencia turística. Lo anterior refleja un nivel de improvisación por parte del Gobierno Nacional, debido a los mínimos avances en materia jurídica como base para la negociación con grupos criminales tanto de impacto local como regional.

De otra parte, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - ACSN han venido copando espacios urbanos, generando un escalamiento de la violencia - llegando en algunos espacios a desafiar el poder de las AGC- con la permisividad institucional local,

convirtiéndose en operadores de represión en espacios suburbanos de la región.

REGIÓN PACÍFICA. Fundamentalmente el Valle del Cauca y el Cauca, constituyen territorios estratégicos, y de hecho, son espacios históricamente disputados por varios actores, tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional -ELN, como de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, que tras su desmovilización, ha dejado organizaciones heredadas que mantienen dinámicas de control social y económico, así como fuertes conexiones con el Ejército Nacional en espacios como el Chocó.



Esto se debe a que en la región también opera el principal puerto del país - el Puerto de San Buenaventura- y gran parte de los cargamentos se realizan por mar, lo que genera un espacio de violencia constante y paradójicamente, empobrecimiento de la población, sumado a dinámicas económicas beneficiosas para estos grupos, como la extracción de madera a gran escala y explotación de yacimientos de carbón.

Existe a la par una fuerte presencia de las AGC quienes ejercen dominio territorial, lo que les posibilita extenderse espacialmente debido a la permisividad de las instituciones. Se encuentran a la par, diferentes procesos organizativos de la sociedad civil, tanto a nivel de Consejos Comunitarios, Cabildos indígenas, organizaciones de campesinos y defensores de Derechos Humanos y ambientales, que reclaman por la desarticulación de un paramilitarismo híbrido, el cese de los confinamientos y por alivios humanitarios.

REGIÓN ORINOQUIA. La región se ha caracterizado por la expansión de las economías ilegales armadas, dada su composición fronteriza con Venezuela. Esto se conecta con condiciones de exclusión estructural y desigualdad en los Departamentos de Arauca, Vichada, Guaviare y Guainía, que contribuyen en la creación de espacios estratégicos para las actividades ilegales. Se mantienen así, enclaves económicos tanto del narcotráfico, como de la explotación ilegal de oro y coltán.

Particularmente la situación del Departamento de Arauca mantiene condiciones complejas en materia de seguridad debido a la dinámica fronteriza, donde se desarrollan disputas territoriales, se consolidan rutas de tráfico ilegal (migración, combustibles, drogas), y se ha proyectado históricamente mediante una dinámica binacional del conflicto armado. Esto implica proponer perspectivas transfronterizas en el análisis y el diagnóstico de la zona, apoyadas en lo que la sociedad civil ha sugerido por medio

de diálogos internacionales y plataformas de presión social para el mejoramiento de las condiciones del territorio.

Región Orinoquía Región Andina



REGIÓN ANDINA. Se parte de la idea fundamental de la presencia del paramilitarismo después del proceso de desmovilización de las AUC entre el 2005-2006 bajo la ley de Justicia y Paz. De allí que, aunque la estructura del proyecto paramilitar desapareciera, se mantienen tendencias y organizaciones heredadas de su accionar. Esto puede visibilizarse en la historia del paramilitarismo en Departamentos como el Tolima y Cundinamarca, y las conexiones con Bogotá donde se han consolidado entramados criminales con economías informales y de borde, así como el mantenimiento del control territorial de barrios periféricos. Existen en la actualidad copamientos territoriales por parte de las disidencias de las FARC por medio de la Nueva Marquetalia, participación de las AGC y de la organización criminal los Paisas en zonas específicas de estos dos departamentos.

En lo que respecta al Departamento de Antioquia, se mantienen diferentes tipos de

violencia que han sido consecuencia del conflicto armado interno, de allí que actualmente la zona tenga presencia del ELN, disidencias de las FARC, grupos paramilitares y sostenimiento de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Han aumentado a su vez delitos como la extorsión, el desplazamiento forzado intraurbano, los confinamientos y el turismo con fines de explotación sexual. En el bajo Cauca, se ha venido generando toda una reingeniería paramilitar a través de las AGC y una expansión inédita.

REGIÓN AMAZÓNICA. zona de importancia geoestratégica regional y mundial, es fundamental realizar análisis de carácter transfronterizo y posibilitar evaluaciones en la dinámica de política económica en virtud de la relación recurso-violencia. Se observa en Departamentos como el Putumayo, la presencia constante de actores armados, principalmente el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y los Comandos de Frontera vinculados a la Segunda Marquetalia, pero también algunos reductos de la denominada Constru, como una organización heredera del paramilitarismo en la zona. En lo que respecta a las acciones de los Comandos de Frontera, quienes ejercen una mayor violencia en el territorio, pueden estimarse el control urbano y las limitaciones a la limpieza social y construcción de nóminas para el reclutamiento de jóvenes. movilidad de los campesinos, prácticas de limpieza social y construcción de nóminas para el reclutamiento de jóvenes.

La percepción de estos grupos en relación con la paz total, parte de cierta disposición a la negociación, pero se caracterizan tanto

los grupos como el Estado colombiano. Por la ausencia de protocolos y gestos directos de paz en las comunidades, lo que reduce la posibilidad de gestionar una agenda de paz territorial.

Región amazónica



ELEMENTOS DE DISCUSIÓN EN LA REALIDAD DE LA GUERRA Y LA PAZ EN LAS REGIONES.

Parte fundamental de comprender las actuales dinámicas de guerra en las regiones y sus especificidades, implica en primera instancia establecer los vínculos existentes entre la violencia rural y la violencia urbana, estableciendo precisamente la necesidad de políticas de paz en ambos espacios, fundamentalmente en el análisis relacional marginación-violencia. Lo anterior implica por ende, que debe construirse un enfoque y un método de abordaje que se ubique temporalmente en los espacios regionales, manteniendo la dinámica histórica y comprendiendo las condiciones actuales de producción de la violencia. Es necesario, en cualquier caso, la posibilidad de la construcción de agendas de paz regional que logren articularse a las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, estudiantiles y

gremiales, como actores claves tanto en el conocimiento de las trayectorias de la guerra en sus territorios como de sus necesidades particulares.

“implica el rediseño de políticas de seguridad, de justicia, reformas en política, pero también reformas en el modelo económico, que sin duda, serán elementos centrales de las discusiones”

En esa perspectiva, una mirada regional y local, no se aleja de un enfoque nacional, sino por el contrario, se relacionan, sobre todo, en la medida en que debe estimarse la capacidad del Estado Colombiano, y el proyecto de país que surge -que se desea- de una política como la Paz total. Eso implica el rediseño de políticas de seguridad, de justicia, reformas en política, pero también reformas en el modelo económico, que sin duda, serán elementos centrales de las discusiones locales, construyendo una política de paz de abajo hacia arriba.

Conectado con lo anterior, se deben estimar los niveles de arraigo de la violencia en las regiones y sus dinámicas multifactoriales, permitiendo diagnosticar las violencias transversales, estructurales y sistémicas en el territorio, lo que permite que la sociedad civil pueda tener espacios amplios de participación en dicha construcción de políticas locales y nacionales.

Ahora bien, los procesos de diagnóstico, análisis e investigación en función de la construcción de una paz total en el país, debe posibilitar ir más allá

allá de una evaluación académica, y permitir la generación de insumos para las comunidades y las posibles mesas de diálogo, con el fin de mejorar las formas de participación social, los enfoques interdisciplinarios e interseccionales que conduzcan a la eliminación de las violencias estructurales y las condiciones de desigualdad.

“las políticas en seguridad deben virar hacia conexiones de lo micro a la macro, anclados en una política criminal preventiva y respetuosa de los DDHH, pero, sobre todo, políticas que desestructuren la desigualdad y la exclusión”

LINEAMIENTOS EN POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PAZ TOTAL

Línea 1. Hacia una visión dinámica y sistémica de seguridad. Sostener políticas de seguridad desconectadas entre ciudades y regiones rurales, así como entre Departamentos y el nivel nacional, implica no reconocer el carácter histórico y casuístico del conflicto armado como dinámica nacional, caracterizada territorialmente por los corredores geoestratégicos, ecosistemas criminales, una extensa capacidad de tercerizar bandas locales y creación de combos de dominación local a través del microtráfico, la extorsión y las economías informales, como lo muestran las organizaciones herederas del paramilitarismo. En ese sentido, es relevante los niveles de comunicación, información y articulación de políticas públicas desde lo local a lo

regional y de lo periférico al centro, posibilitando una mirada multinivel de la violencia, sus especificidades territoriales y sus pretensiones nacionales. Así las políticas en seguridad deben virar hacia conexiones de lo micro a la macro, anclados en una política criminal preventiva y respetuosa de los DDHH, pero, sobre todo, políticas que desestructuren la desigualdad y la exclusión.

Línea 2. Lógicas complejas para romper los dualismos de lo criminal y lo político. Si bien las clasificaciones de fines políticos o criminales para las organizaciones en el conflicto armado han sido fundamentales para la construcción de los marcos de negociación y de los marcos jurídicos, pero procesos de hibridación como el caso de las AGC, tensionan las definiciones conceptuales históricas. Para esto, sostener que hay un carácter ideológico que atraviesa estas organizaciones es un avance significativo, pues evidencia el marco de composición histórico y social de los grupos, sus procesos de fundamentación, teatralidad y puesta en escena en el conflicto, pero también su proyecto de país. En efecto, las trayectorias de sus prácticas de violencia contribuyen a examinar su marco operativo, sus objetivos inmediatos y sus motivaciones, así como las

“tener en cuenta las críticas que se establecen desde los procesos de la justicia transformativa a la justicia transicional, esta última como una oferta de bienes liberales y consolidación neoliberal por medio de los derechos civiles y políticos”

interacciones prosistémicas o contra-sistémicas (al apoyo del estado o contra el estado).

Línea 3. Justicia transicional, transaccional y transformativa. Dos procesos jurídicos en el marco de la justicia transicional se mantienen en Colombia, tanto el marco de la Ley de Justicia y Paz como la Justicia Especial para la Paz- JEP, tienen actualmente competencia y funcionamiento. Así se establece inicialmente la complejidad de crear otros mecanismos de justicia para el marco de la paz total, optando necesariamente por revisar y evaluar ampliamente modificaciones a estas dos estructuras, que posibiliten incluir las demandas de justicia de las víctimas, pero también las demandas de las partes y los actores de las negociaciones. Por ejemplo, tener en cuenta las críticas que se establecen desde los procesos de la justicia transformativa a la justicia transicional, esta última como una oferta de bienes liberales y consolidación neoliberal por medio de los derechos civiles y políticos (participación política y justicia reparativa), pero sin abordar las formas de exclusión y desigualdad estructural del sistema y el modelo económico, impidiendo un cambio sustancial de las causas del conflicto armado, manteniendo un modelo económico hegemónico y funcional a la dinámica global del mercado.

Es necesario en el marco de las negociaciones con grupos paramilitares y narcotraficantes, la revisión de un marco jurídico que propenda por investigar y responsabilizar penalmente los crímenes

cometidos por estas organizaciones, revisando que tan amplia es la posibilidad del Estado Colombiano, tanto a nivel internacional como en su normativa interna, de crear dinámicas de transaccionalidad por medio de medidas sancionatorias benignas, mecanismos de no repetición, procesos de transición de la criminalidad a la vida civil y modificación de condiciones materiales para miles de jóvenes que engrosan estas organizaciones, sin detrimento a los derechos de las víctimas.

AlaOrilladelRío

*Centro de pensamiento desde la Amazonía
colombiana*



Contacto: Jan Boesten, PhD (UBC)
Pagina de web: <https://www.lai.fu-berlin.de/homepages/boesten/index.html>
Email: jan.boesten@fu-berlin.de

Funded by

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft
German Research Foundation